



País	Colombia
Años	2000-2001

En 1999, fueron asesinados seis periodistas en Colombia. Los profesionales de la prensa colombianos coinciden en afirmar que las amenazas contra los medios de comunicación ya no suelen emanar principalmente de los narcotraficantes, sino más bien de los grupos armados, es decir, los grupos de guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de tendencia marxista y el Ejército de Liberación Nacional de orientación guevarista, y también los grupos paramilitares, principalmente las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de extrema derecha.

Las negociaciones de paz entabladas por el Gobierno con los distintos grupos guerrilleros han provocado una radicalización de la extrema derecha, que está en contra de toda tentativa de pacto. Seis periodistas que defendieron las negociaciones se vieron obligados a exilarse por haber abogado por las negociaciones. No se sabe a ciencia cierta si son los paramilitares o los sectores ultras del ejér-

cito los autores del asesinato de Jaime Garzón. Las organizaciones de guerrilla no les van mucho a la zaga, ya que son responsables de la muerte de un periodista y no vacilan en secuestrar a los profesionales de la prensa para denunciar las exacciones perpetradas por los militares. Cuando los grupos armados sospechan que un periodista apoya al «otro bando», automáticamente lo consideran un «objetivo militar».

Periodistas asesinados

El 13 de agosto de 1999, el periodista y humorista de la emisora Radionet y del canal Caracol Televisión, Jaime Garzón, fue asesinado en Bogotá por dos hombres que circulaban en una moto. Era públicamente sabido que Garzón había intervenido varias veces en las negociaciones entabladas para conseguir que los movimientos guerrilleros liberaran a personas secuestradas y que las autoridades entablaran conversaciones con el ELN. Algunos observadores presumen

que pueden estar implicados en su asesinato los militares ultras hostiles al proceso de paz, especialmente algunos miembros de los servicios de información del ejército.

El 16 de septiembre, Guzmán Quintero Torres, redactor en jefe del diario local El Pilón y corresponsal del canal de televisión regional Telecaribe de Valledupar (Departamento de César), una localidad del nordeste del país, fue asesinado en un bar en presencia de dos colegas suyos. Este periodista había condenado en sus artículos las violaciones de los derechos humanos perpetradas por el Ejército. Guzmán Quintero había sido anteriormente corresponsal del diario regional *El Heraldo* y en 1996 había recibido amenazas de los grupos militares que luchaban contra las guerrillas en esta región. El 30 de septiembre, fueron detenidos y acusados del asesinato de este periodista Jorge Eliecer Espinal Velázquez y Rodolfo Nelson Rosado Martínez, que al parecer pertenecen a una banda de sicarios.

El 21 de octubre, la policía encontró el cadáver de Rodolfo Julio To-

rres, corresponsal de la emisora de radio Fuentes en la localidad de Sincelejo. Había sido asesinado de tres disparos en la cabeza después de haber sido secuestrado pocas horas antes en su domicilio por un grupo de hombres armados. En 1998, se habían difundido en la comarca algunos pasquines atribuidos a los paramilitares de las AUC, en los que se le acusaba de ser simpatizante del ELN.

El 28 de noviembre, los cadáveres de un operador independiente de cine y televisión, Luis Alberto Rincón, y del propietario y director de la empresa Producciones Colombianas Ltda, Alberto Sánchez Tovar, fueron encontrados cerca de la localidad de El Playón, en el departamento de Santander. Ambos periodistas fueron respectivamente víctimas de una y dos balas disparadas a bocajarro. Se dirigían a El Playón para cubrir las elecciones municipales. Las pesquisas se orientan hacia los grupos militares que están muy implantados en la comarca. Dos meses antes ya se les había atribuido el asesinato del anterior alcalde de El Playón. No



obstante, la policía no descarta la hipótesis del móvil del robo, ya que no se pudo encontrar el material que llevaban los dos periodistas.

El 3 de diciembre, Pablo Emilio Medina, un operador del canal de televisión TV Garzón del departamento de Huila, fue asesinado cuando cubría la ofensiva de las FARC contra la localidad de Gigante situada a 260 km. al sur de Bogotá. Según la policía, Pablo Emilio Medina perdió la vida a manos de este grupo armado cuando se trasladaba en moto a Gigante en compañía de un policía que logró darse a la fuga.

Nuevos elementos sobre periodistas asesinados antes de 1999

El 16 de abril de 1999, el sicario Libardo Humberto Prada Bayona fue acusado del homicidio de la periodista Amparo Jiménez Payares. El asesino fue detenido por la policía pocos días después de haber consumado el crimen y confesó haber recibido 35.000 dólares (35 000 euros) por perpetrarlo.

Amparo Jiménez era corresponsal en Valledupar (Departamento de César) del diario televisado «En Vivo» de Cadena A, y se presume que muy probablemente fueron grupos paramilitares los que la asesinaron el 11 de agosto de 1998. Al parecer, no le habían perdonado un reportaje que hizo en 1996 acusándoles directamente de desplazar por la fuerza a los campesinos de sus tierras.

El 26 de abril, Julio Cesar Ospina Chavarro et Carlos Arturo Morales Osorio fueron acusados del asesinato de Bernabé Cortés, un periodista del canal de televisión Telepacífico. Este periodista fue asesinado por tres sicarios en Cali el 19 de mayo de 1998, cuando estaba realizando una investigación sobre el tráfico de droga. Julio Cesar Ospina Chavarro ya ha sido detenido, pero no se ha podido dar todavía con el paradero de Carlos Arturo Morales Osorio.

En la primavera, se ordenó el arresto de José Edgar García González por ser el presunto autor del homicidio de Jairo Elías Marqués, director de la revista humo-

rística *El Marqués de Armenia* (Departamento de Quindío), que fue asesinado el 20 de noviembre de 1997. En su revista, este periodista había puesto en entredicho la probidad de un miembro del Congreso, Carlos Alberto Oviedo, en un caso de desaparición sospechosa de fondos pertenecientes al erario público.

El 23 de julio, Juan Carlos Henao Mosquera fue acusado del homicidio de Ernesto Acero Candena, director del semanario *Informador Socioeconómico*. Este periodista fue asesinado el 12 de diciembre de 1995 en pleno centro de la ciudad de Armenia (Departamento de Quindío). Juan Carlos Henao Mosquera ha sido encarcelado.

Periodistas secuestrados

El 26 octubre de 1999, el fotógrafo de la agencia Reuters, Henry Romero, fue secuestrado por el ELN cuando cubría una entrevista entre jefes guerrilleros y familias de personas secuestradas por este grupo armado. El ELN acusó a este fotógrafo de haber publicado fotos

en las que los guerrilleros aparecían con la rostro al descubierto. Henry Romero fue liberado el 3 noviembre y pocas semanas después decidió salir de Colombia.

El 29 de octubre, fueron raptados por los guerrilleros del «Frente 24» de las FARC los siguientes periodistas: Blanca Herrera y John Jairo León del canal de televisión CM1; Wilson Lozano de Caracol Televisión; Hidamys Acero y Reynaldo Patiño de la emisora de televisión RCN TV; Aldemir Luna del diario *Vanguardia Liberal*; y Frank Chagual, operador del diario televisado «Noticiero de las siete». Las FARC explicaron que el objetivo del secuestro era atraer la atención de los periodistas sobre las exacciones perpetradas por los paramilitares en la parte septentrional del país, en el Departamento de Bolívar. Los siete periodistas fueron liberados el 2 de noviembre.

El 10 noviembre, fueron secuestrados por las FARC los siguientes profesionales: José Urbano Céspedes y Aldemar Cárdenas del canal Caracol Televisión; Gregorio Maestre del diario televisado «CM1»; Isa-

bel Ballesteros y David Sierra de la emisora de televisión RCN; y Edgar de la Hoz y Pablo Camargo del diario *El Pilón de Valledupar* (Departamento de César). Dos días más tarde, este grupo armado canjeó a cinco de ellos por un delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja para que esta organización le proporcionara explicaciones sobre la asistencia sanitaria dispensada a los miembros de grupos paramilitares. Cuando liberaron a los cinco periodistas, las FARC publicaron un comunicado denunciando las exacciones perpetradas por las AUC en el Departamento de César. Los dos periodistas restantes fueron liberados el 14 de noviembre.

Periodista detenido

El 7 de octubre de 1999, Carlo Pizatti, colaborador del diario italiano *La Repubblica*, fue detenido por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) tras haber efectuado un reportaje en la zona desmilitarizada de San Vicente del Caguán situada al sur de Bogotá y

ocupada por las FARC. Al periodista le incautaron todo el material (magnetófono, ordenador, cámara fotográfica, etc.) y se le interrogó sobre la entrevista que le había concedido uno de los representantes de las FARC, Raúl Reyes. Pizzati fue puesto en libertad al día siguiente.

Periodistas agredidos

El 11 de abril de 1999, Wilson Lozano y el operador Henry Durán, del diario televisado NTC, que difunde la emisora estatal de televisión Canal A, resultaron levemente heridos cuando se desplazaban a bordo de un helicóptero de la policía que fue tiroteado por grupos de las FARC y del ELN. Ambos profesionales estaban realizando un reportaje sobre la lucha contra el tráfico de droga en la región de Barrancabermeja, que está situada al norte de Bogotá y es un escenario de violentos enfrentamientos entre guerrilleros y grupos paramilitares.

El 10 de junio, Hans Sarmiento y su equipo del noticiero televisado del canal RCN fueron hostigados



por las FARC en la comarca de El Espino (Departamento de Boyacá). Este equipo de televisión intentaba cubrir el asalto de un pueblo por la guerrilla. Ninguno de los periodistas resultó herido.

El 14 de noviembre, una bomba explotó en las proximidades de las oficinas que tiene en Cali el diario *El Tiempo*. En la tarde de ese mismo día, un desconocido llamó por teléfono a la emisora de radio Todelar y al diario *El Espectador*, explicando que se trataba de una operación de represalias de las FARC como consecuencia de las revelaciones de ese diario sobre los objetivos militares de la guerrilla. Parece ser que el ELN y un misterioso comando de «resistencia patriótica colombiana» reivindicaron también el atentado.

Periodistas amenazados

El 3 de marzo de 1999, José Laureano Restrepo Colé, corresponsal en Sucre (Departamento de Bolívar) de Radio Caracol y periodista del diario local *El Meridiano de Sucre*, se vio obligado a escon-

derse durante varios días por haber sido seguido y amenazado por unos desconocidos. Este periodista es conocido por sus investigaciones sobre la corrupción de los círculos políticos.

El 27 de mayo, Yinet Bedoya, periodista del departamento de «casos policiales» del diario *El Espectador* salió ilesa de una agresión perpetrada por dos hombres que circulaban en una moto. Yinet Bedoya había sido objeto de amenazas en varias ocasiones por sus investigaciones en los medios penitenciarios. En agosto de 1998, ya se la había intimidado por haber revelado un proyecto de evasión de varios narcotraficantes encarcelados en Bogotá.

El 23 de junio, el reportero Juan Carlos Aguiar y el operador John Jader Jaramillo del canal RCN Televisión se vieron obligados a abandonar sus domicilios respectivos de las localidades de Manizales y Pereira. Desde el 8 de junio, estos dos periodistas recibían sin cesar amenazas y eran seguidos por la calle o agredidos. En uno de sus reportajes, habían cuestionado la

pasividad de policías que habían presenciado el linchamiento mortal de una persona a manos de un grupo numerosos de manifestantes. Otro profesional, el fotógrafo del diario *La Patria*, Darío Augusto Cardona, declaró también que había recibido amenazas de muerte desde que se publicaron las fotos que había hecho de este mismo acontecimiento.

El 23 de agosto, el Ejército Rebelde Colombiano (ERC) difundió un documento en el que amenazaba de muerte a veintiuna personalidades comprometidas en el proceso de paz. El ERC les acusaba de «fomentar la guerra entre colombianos». Entre las personas intimidadas figuraban dos colaboradores del diario *El Espectador*, Alfredo Molano y Arturo Alape, así como Patricia Lara del diario *El Tiempo*. Algunos observadores presumen que detrás de este grupo armado hasta ahora desconocido pueden escudarse militares ultraderechistas hostiles al proceso de paz.

El 25 de noviembre, el colaborador y caricaturista del diario *El Nue-*

vo Siglo, Alvaro Montoya Gómez, anunció que renunciaba a seguir publicando su crónica semanal tras haber recibido amenazas de muerte contra él y su familia. El periodista había denunciado las violaciones de los derechos humanos perpetradas por el ejército. El periodista había sido un allegado de Alvaro Gómez Hurtado, el accionista principal y editorialista de *El Nuevo Siglo* que fue asesinado en 1995 por los paramilitares.

Presiones y trabas

El 14 de enero de 1999, Saulo Arboleda, ex Ministro de la Comunicación, y Rodrigo Villamizar, ex ministro de Minas y Energía, fueron condenados por «irregularidades» cometidas en julio de 1997 con motivo de la atribución de bandas de frecuencia a emisoras de radio. Les fueron impuestas sendas penas de multa de 16 y 12 millones de pesos (8 000 y 6.000 euros, respectivamente) y una suspensión temporal de sus derechos cívicos. Su dimisión del Gobierno la provocó por aquel entonces la revista



Semana con la publicación de una conversación telefónica en la que ambos hablaban de favorecer a los «amigos de Samper».

El 19 de enero, tuvo que abandonar Colombia el cronista de *El Espectador* Alfredo Molano. El periodista había condenado la matanza de 130 personas perpetrada a principios de ese mes por las AUC dirigidas por Carlos Castaño. Este último había calificado a Molano de «paraguerrillero».

El 30 de marzo, los guerrilleros del ELN guevarista declararon en un comunicado que «serían objetivos militares permanentes todos los periodistas y la prensa que sirviesen de conducto de difusión política» a los grupos paramilitares de extrema derecha.

El 24 de abril, salió de Colombia Víctor Sánchez Rincones del diario *El Meridiano* de Córdoba publicado en Montería (Departamento de Córdoba). El periodista había estado recibiendo amenazas desde que denunció en septiembre de 1998 a las AUC por el rapto de varios profesores de la Universidad de Córdoba y por el atentado per-

petrado contra un policía.

En mayo, salió de Colombia con destino a los Estados Unidos la periodista María Cristina Caballero de la revista *Semana*. Había recibido amenazas de muerte en varias ocasiones por haber entrevistado a narcotraficantes y a representantes de las organizaciones guerrilleras o de los grupos paramilitares.

El 15 de septiembre, dejó Colombia Jorge Rivera Sena, corresponsal del diario regional *El Universal* del Departamento de Bolívar (norte del país). El 22 de mayo, el periodista había sido secuestrado durante nueve días por un grupo armado que muy probablemente pertenecía a las AUC. Jorge Rivera Sena había mencionado en sus artículos las matanzas perpetradas por los paramilitares. En marzo de 1999, un coronel del ejército le había tratado de «guerrillero». Desde que fue secuestrado, este periodista había seguido recibiendo amenazas.

El 16 de septiembre, tuvo que salir de Colombia el periodista Antonio Morales. Los grupos paramili-

tares habían proferido amenazas de muerte contra Morales desde que éste se había declarado en favor de las negociaciones entre el Gobierno y los grupos guerrilleros.

El 18 de septiembre, se exilió Plinio Apuleyo Mendoza que había trabajado para el diario *El Espectador* y la emisora de radio RCN. El 23 de marzo había salido ileso de un atentado perpetrado por el ELN que le acusaba de ser «un ideólogo y propagandista de la violencia parainstitucional y paramilitar».

El 7 de octubre, las FARC conminaron a la «prensa embustera» a no desplazarse a la zona de San Vicente del Caguán que el Gobierno ha desmilitarizado en el marco de las negociaciones de paz. En septiembre, la agencia de prensa Anncol de las FARC publicó una serie de artículos en los que se designaba al periodista Edgar Torres del diario *El Tiempo* como «corresponsal de las Fuerzas Armadas», al mismo tiempo que se cuestionaba la independencia de Ana Mercedes Gómez, directora del diario *El Colombiano*, de Gabriel

García Márquez, director del semanario *Cambio*, y de la revista *Semana* respecto de los grupos paramilitares y del ejército.

El 14 de octubre, se refugió en Alemania Hernando Corral Garzón, subdirector del diario televisado «Telenoticiario de las 7». Este miembro de la Comisión para la Paz, a la que el Gobierno había encomendado la preparación de negociaciones con el ELN, había sido amenazado por los grupos paramilitares. Según Hernando Corral, los periodistas, intelectuales y universitarios partidarios de las negociaciones son el blanco principal de una «guerra sucia» de los paramilitares que se oponen al proceso de paz iniciado por el Gobierno. También era miembro de la Comisión para la Paz el periodista Jaime Garzón que fue asesinado el 13 de agosto de 1999.

El 7 de diciembre, también tuvo que dejar Colombia Carlos Pulgarín, corresponsal del diario *El Tiempo* en Bucaramanga (Departamento de Santander). Hacía diez días que recibía llamadas telefónicas advirtiéndole que iba a «pagar» el

hecho de haber denunciado a las autoridades las amenazas proferidas contra él cinco meses antes. El 30 de junio, cuando Carlos Pulgarín ejercía la corresponsalía de *El Tiempo* en la localidad de Montería (Departamento de Córdoba), fue acusado de ser «el portavoz de la guerrilla». El periodista había relatado una derrota del ejército y de los paramilitares en un combate contra la guerrilla y había acusado a las AUC del asesinato de un dirigente de una comunidad indígena. *El Tiempo* decidió trasladarle a otra ciudad.

Mientras las negociaciones de paz que el presidente Andrés Pastrana entablara en 1998 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-marxista) se encuentran en un impase, el conflicto entre los grupos paramilitares de extrema derecha y los grupos guerrilleros prosigue en el terreno y hasta en las salas de redacción. A principios de febrero de 2000, Manuel Marulanda, jefe de las FARC, acusó a los grupos de prensa de estar «al servicio de los grandes monopolios» y de presentar la información relativa a su grupo armado de manera «parcial». Este año, una vez más, una veintena de periodistas fueron secuestrados por grupos guerrilleros, a menudo para protestar contra su cobertura del conflicto. En cuanto a los grupos paramilitares, en su mayoría a las órdenes de Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), siguen amenazando a todos aquellos que participan en el proceso de paz o a quienes consideran sospechosos de apoyar al «otro bando». Al menos seis de los once periodistas

exiliados este año fueron amenazados por paramilitares. Entre ellos, María Alejandra González, acusada de ser una «ideóloga» de la guerrilla. Un periódico, Alternativa, que se disponía a publicar una investigación sobre la presunta estrategia de la extrema derecha para tomar el poder, se vio obligado a cerrar tras el robo de su material de trabajo.

En el conflicto que desgarró al país desde hace cuarenta años, se considera a los profesionales de la información como «objetivos militares». Según una encuesta de la Universidad de la Sabana, publicada en febrero de 2000, 42,5% de los periodistas interrogados afirman haber sido objeto de amenazas en algún momento de su carrera. Amenazas que obligan a muchos a autocensurarse. Los que se niegan a callar saben que corren el riesgo de ser asesinados, como fue el caso, una vez más este año, de dos periodistas.

No obstante, cabe confiar en una regresión de la impunidad pues las pesquisas sobre los asesinatos de periodistas, a cargo de la oficina de

investigaciones del fiscal general de la Nación, han permitido identificar, e incluso arrestar, a los autores de varios de esos crímenes. Otro motivo de esperanza es que en 2000 el gobierno ha puesto en marcha un programa de protección de los periodistas amenazados. Sin embargo, el hecho de que, el mismo día de su lanzamiento, dos periodistas fueran tomados como rehenes demuestra que pasará tiempo antes de que ese programa sea realmente eficaz.

Periodistas asesinados

El 31 de octubre de 2000 fue asesinado Juan Camilo Restrepo, director de la radio comunitaria Galaxia Estéreo, emisora de la localidad de Ebéjico, en el departamento de Antioquia (nordeste del país). Según fuentes cercanas a la pesquisa, el periodista fue asesinado por paramilitares por haber revelado casos de corrupción. Al parecer, el asesino fijó una cita a la que el periodista acudió acompañado por su hermano, quien fue testigo del crimen. Desde entonces, el her-

mano del periodista está obligado a esconderse y la familia ha abandonado el pueblo.

El 15 de noviembre, Gustavo Ruiz Cantillo, periodista de Radio Galeón, emisora privada de la ciudad de Santa Marta en el departamento de Magdalena (norte del país), fue asesinado en Pivijay (provincia de Magdalena). El periodista caminaba por la calle cuando dos individuos se acercaron y le pegaron dos tiros en la cabeza. Gustavo Ruiz Cantillo denunciaba las violencias perpetradas por los paramilitares en la región. Según sus colegas y familiares, había recibido amenazas de muerte atribuidas a ese grupo armado.

Otro periodista fue asesinado en 2000 pero, a la fecha del 1° de enero de 2001, resulta imposible afirmar si ese crimen guarda relación con las actividades profesionales de la víctima.

El 13 de diciembre, Alfredo Abad, desde 1998 director regional de información de la Voz de la Selva, antena regional de Radio Caracol en Florencia (sur del país), fue asesinado frente a su domicilio por dos

individuos que circulaban en moto. Según la emisora, no había recibido ninguna amenaza. No obstante, de acuerdo con una fuente que desea conservar el anonimato, el periodista fue asesinado por paramilitares en momentos en que realizaba indagaciones sobre la muerte de un allegado, asesinado unos días antes.

Nuevos elementos sobre periodistas asesinados antes de 2000

Según un informe publicado en enero de 2000 por la Fiscalía General de la Nación, Hernando Rangel, director y propietario de la revista mensual Sur 30 días, publicada en Plato, fue asesinado, el 12 de abril de 1999, por un sicario. La pesquisa se orienta hacia Fidias Ospino Fernández, ex alcalde de la ciudad, cuya probidad el periodista había puesto en entredicho en relación con casos de corrupción. Este asesinato eleva a siete el número de periodistas asesinados en Colombia en 1999 por sus opiniones o en el ejercicio de su profe-

sión.

El 11 de julio de 2000, Rodolfo Nelson Martínez y Jorge Eliécer Espinal Velásquez fueron inculpa- dos por el asesinato, el 16 de sep- tiembre de 1999, de Guzmán Quin- tero Torres, periodista y editor del periódico regional El Pílon, publica- do en Valledupar, localidad del nor- te del país, cercana a la frontera con Venezuela. Los dos hombres ha- bían sido arrestados el 26 de sep- tiembre de 1999. La conclusión de la pesquisa fue que el asesinato había sido motivado por la activi- dad periodística de Guzmán Quin- tero. Éste había denunciado las exacciones perpetradas por miem- bros de las fuerzas armadas y ha- bía recibido amenazas unas sema- nas antes de su asesinato. El 13 de septiembre, la Fiscalía transmi- tió el expediente a las autoridades competentes de Valledupar a fin de que se abriera el proceso.

El 11 de julio, José Morales y Orlando Sánchez, presuntos miem- bros de las AUC, fueron inculpa- dos del asesinato de Alberto Sánchez Tovar, propietario de la empresa de producción Produccio-

nes Colombianas Ltda., y de Luis Alberto Rincón, cámara indepen- diente, el 28 de noviembre de 1999. Ambos periodistas fueron asesina- dos cuando se disponían a cubrir las elecciones municipales de El Playón, en el departamento de Santander.

El 12 de diciembre, en una entre- vista concedida a Caracol Televi- sión, seis miembros de la organi- zación criminal La Terraza recono- cieron haber asesinado, el 13 de agosto de 1999, al periodista Jai- me Garzón. Los seis afirmaron ha- ber cumplido órdenes de Carlos Castaño, jefe de las AUC, quien al parecer les había prometido a cam- bio treinta millones de pesos (15.000 euros) y el control de una parte del tráfico de drogas en el país. Los asesinos declararon ha- ber conservado el arma del crimen y estar dispuestos a negociar su rendición. Confirmaron también la hipótesis de que el asesinato estu- vo motivado por el papel de inter- mediario desempeñado por el pe- riodista y humorista de Radionet y de Caracol Televisión en la libera- ción de personas secuestradas por



movimientos guerrilleros. El 5 de julio, la Fiscalía, a cargo de la investigación, ya había pronunciado una orden de arresto contra Carlos Castaño por «homicidio agravado», acusación que podría valerle la condena a sesenta años de cárcel. Las revelaciones de los asesinos llevan a reconsiderar la detención, a principios de año, de Juan Pablo Ortiz, Wilson Lozano y Diego León Ortiz, como presuntos autores del asesinato. Tras haber colaborado durante años, las AUC y el grupo La Tierra se enfrentan, desde hace unos meses, en una lucha sin cuartel.

El 21 de diciembre se tuvo conocimiento de que el tribunal de Neiva (sur de Bogotá) había absuelto a Fernando Bermúdez, Víctor Trujillo y Álvaro Quintero, presuntos autores del asesinato, el 16 de abril de 1998, de Nelson Carvajal. El juez estimó que las pruebas presentadas por la acusación eran insuficientes y que los testimonios carecían de credibilidad. El proceso se había abierto el 29 de noviembre después de que los tres individuos fueran inculcados, el 17 de enero

de 2000. La investigación a cargo de la Fiscalía había concluido que el hombre de negocios Fernando Bermúdez era el autor intelectual del crimen y que Víctor Trujillo y Álvaro Quintero habían sido sus cómplices. Varios testigos afirmaron que Bermúdez había intentado sobornar al periodista antes de amenazarlo. El periodista de Radio Sur fue asesinado cuando estaba investigando acerca de casos de corrupción en la ex administración municipal de Pitalito (sudoeste de Bogotá) a la que pertenecía Fernando Bermúdez.

Periodistas secuestrados

El 25 de mayo de 2000, Jineth Bedoya, del diario El Espectador, fue secuestrada en Bogotá por miembros de las AUC. La periodista fue liberada unas diez horas más tarde en los alrededores de la ciudad de Villavicencio (a unos 100 Km al sudeste de Bogotá). Durante su cautiverio, se la amordazó y maniató, y luego fue golpeada, drogada y violada. A principios de mayo, su periódico había revelado

la matanza de varias decenas de detenidos en la penitenciaría La Modelo, en Bogotá, perpetrada por miembros de las AUC que están encarcelados allí. En mayo de 1999, la periodista había salido ilelesa de una primera agresión y ya había sido amenazada por sus investigaciones sobre las prisiones.

El 13 de agosto, Guillermo Cortés, director del consejo editorial del telediario «Hora Cero», fue liberado por el ejército junto con otras cuatro personas, en su mayoría hombres de negocios, rehenes como él de las FARC. El periodista estaba detenido desde el 22 de enero de 2000 por la brigada 53 de las FARC, que había reclamado un millón de dólares por su liberación. Ese grupo guerrillero negó en un primer momento haber secuestrado al periodista antes de exigir un rescate en el mes de mayo.

El 5 de octubre, Andrés Gil y Gustavo González, respectivamente reportero y cámara del canal de televisión RCN, y Pedro Pinto, su chófer, fueron secuestrados por guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN – guevarista) cuan-

do cubrían la toma por ese grupo armado de un sector de la autopista entre Bogotá y Medellín. El ELN explicó que reprochaba a la prensa no haber transmitido sus informaciones acerca de las violaciones de los derechos humanos cometidas por el ejército. Los dos periodistas y el chófer fueron puestos en libertad doce horas más tarde a la salida de Medellín. Al día siguiente, el mismo grupo armado secuestró, por los mismos motivos, a Jaime Arango y Jesús Abad, respectivamente periodista y fotógrafo del diario El Colombiano, publicado en Medellín, quienes fueron liberados dos días después.

El 2 de noviembre, Carlos Armando Uribe y Jorge Otalora, respectivamente presentador y productor del programa semanal «Profesor Yarumo», difundido por el Canal 1 de televisión, fueron secuestrados por miembros del ELN al concluir la filmación de un programa en el departamento de Tolima. El primero fue liberado una semana más tarde, mientras que Jorge Otalora recobró la libertad el 29 de noviembre. Al parecer, a cambio de su li-

beración, el grupo armado exigió informaciones sobre las actividades de la Federación de Productores de Café, que financia el programa. El 6 de diciembre, Oscar Montoya, Oscar Álvarez y Alexander Cardona, de la radiotelevisión Caracol, Fernando Tabares, Sergio Goez y Pedro Pinto, de RCN, Yolando Bedoya, Luis Fernando Marín y Gildardo Álvarez, de la cadena de televisión CM&, Diego Argáez, del canal de televisión Canal A, Luis Benavides, del diario El Espectador, Miguel Jaramillo y el equipo del telediario «Noticiero de las 7», fueron detenidos por las FARC cuando intentaban cubrir los enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército cerca de Granada (390 Km al noroeste de Bogotá). Los periodistas fueron liberados al día siguiente, al término de la ofensiva de ese grupo armado contra la ciudad.

El 15 de diciembre, Wiston Viracachá, corresponsal del canal de televisión Caracol Televisión en Pasto, departamento de Nariño (límite de Ecuador), fue secuestrado durante una operación organizada por miembros del ELN. Dos

otros miembros del equipo de televisión, Dolly Morales, asistente del periodista, y Germán Arcos, cámara, fueron interceptados con el periodista y liberados después de que los guerrilleros verificaran su identidad. El periodista fue liberado nueve días más tarde, el 23 de diciembre. Atado y encapuchado durante todo su cautiverio, Wiston Viracachá afirmó haber temido varias veces por su vida. El periodista informó de que el grupo armado le acusaba de tener vínculos con los grupos paramilitares basándose en una denuncia hecha por otro periodista.

Periodistas exiliados

El 11 de enero de 2000, por segunda vez en quince días, el periodista colombiano Carlos Pulgarín, ex corresponsal del diario *El Tiempo*, recibió amenazas en Lima, Perú, donde estaba refugiado desde el mes de diciembre de 1999. Los autores de las llamadas anónimas advirtieron al periodista que sabían donde se escondía y que lo matarían. Carlos Pulgarín había

salido de Colombia el 7 de diciembre de 1999 tras haber sido amenazado, en varias ocasiones, en particular por el ejército que le acusaba de ser un «portavoz de la guerrilla». Poco después abandonó el Perú con destino a un país europeo.

El 20 de febrero, Mireya Álvarez Ramírez, propietaria del bimensual *La palma en facetas*, publicado en La Palma, localidad del centro del país, fue amenazada de muerte por presuntos miembros de las FARC que le dieron treinta días para que les entregara diez millones de pesos (5.000 euros). El 12 de marzo la revista dejó de publicarse. Pocas semanas después, Mireya Álvarez abandonó el país. Ya se había visto obligada a exiliarse entre mayo y octubre de 1999 tras recibir intimidaciones de la misma índole. En 1998, los rebeldes habían difundido volantes en los que se prohibía la circulación de cualquier periódico en la región. El 11 de marzo, Francisco Santos, jefe de redacción del diario *El Tiempo*, salió de Colombia al enterarse de que existía un plan de las FARC

para asesinarlo. Francisco Santos, que es también presidente de la fundación «País libre», que lucha contra los secuestros, afirma haber pagado así el precio de su combate y de su posición en contra de los secuestros (unos 3.000 en 1999) perpetrados especialmente por grupos guerrilleros con objeto de financiar la lucha armada. Francisco Santos había creado la fundación «País libre» tras haber permanecido secuestrado durante ocho meses por Pablo Escobar en 1990.

En marzo, William Parra, presentador en el canal Caracol Televisión y realizador del telediario de la noche, se exilió en España. En Colombia, su nombre era el segundo de una lista de seis periodistas que los paramilitares se proponían eliminar. El primero de la lista, Jaime Garzón, fue asesinado el 13 de agosto de 1999. William Parra criticaba las relaciones entre el ejército y los grupos paramilitares. Instalado en Madrid, sigue recibiendo amenazas.

En el mes de mayo, se exilió William Maldonado, del Canal 5 de

televisión. En marzo había recibido, junto con su colega Luis Fernando Murena, amenazas de las AUC. Los paramilitares acusaban a ambos periodistas de ser «auxiliares» de los grupos guerrilleros tras la difusión por Canal 5 de imágenes de seis policías secuestrados por las FARC.

El 1° de junio, Ignacio Gómez, responsable de la sección de investigaciones del diario El Espectador, director de la Fundación por la libertad de prensa de Colombia y corresponsal de Reporteros sin Fronteras en Bogotá, salió de su país con destino a Estados Unidos. El 24 de mayo, un grupo de individuos había intentado secuestrarlo. Entre febrero y mayo de 2000 había recibido cincuenta cartas de amenaza en relación con sus investigaciones sobre una matanza ocurrida en 1997 y atribuida a Carlos Castaño y a las AUC.

El 3 de junio, María Alejandra González, de Radio Super, emisora de la ciudad de Popayán (departamento de Cauca), salió de Colombia tras haber sido informada por los servicios de informaciones de

que existía un plan de las AUC para asesinarla. Los paramilitares la acusan de ser una «ideóloga» de las FARC. María Alejandra González es también miembro de una organización de defensa de los derechos humanos. Las amenazas estarían motivadas por su cobertura de las manifestaciones de campesinos en la región, en noviembre de 1999.

En septiembre, Hollman Felipe Morris, del diario El Espectador, se refugió en España tras haber sido amenazado de muerte, en varias ocasiones, por sus artículos sobre la situación de los derechos humanos en su país. En 1999, se había desempeñado también como corresponsal de RCN TV en la zona desmilitarizada controlada por las FARC, en el sur del país.

En el mes de octubre, abandonó Colombia Alfonso Miranda Ricaurte, periodista de la emisora Radar Económico de la Costa, en la ciudad de Barranquilla, situada en el norte del país. Desde el mes de abril, el periodista recibía periódicamente intimidaciones telefónicas. Su interlocutor lo amenazaba con



tomar represalias contra su familia, dando detalles muy precisos sobre las costumbres de sus hijos y de su esposa. El periodista difundía informaciones acerca de casos de corrupción y sobre la presencia de grupos armados en la región. Al menos dos periodistas más se han visto obligados a exiliarse en 2000 por haber recibido amenazas vinculadas con sus actividades periodísticas: Felipe Zuleta, del diario *El Espectador*, y Martín Movilla, del canal de televisión Caracol Televisión. El primero había redactado artículos sobre los secuestros. El segundo trabajaba en la zona desmilitarizada controlada por las FARC, en el sur del país, y había sido amenazado en varias ocasiones.

Periodistas detenidos

El 9 de julio de 2000, los periodistas franceses Georges Bartoli, fotógrafo del diario francés *L'Humanité*, y Gilles Gesson, periodista independiente, fueron detenidos en la ciudad de Arauca, situada en el nordeste del país, por

los servicios del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS). Ambos periodistas, a quienes se les reprochó oficialmente no poseer visado de prensa, cubrían la visita del sindicalista francés José Bové. Este último participaba en una misión de observación de las negociaciones entre el gobierno y la comunidad india U'was que se opone a la instalación de empresas petroleras en su territorio. Ambos periodistas fueron puestos en libertad al día siguiente.

Periodistas agredidos

El 5 de abril de 2000, Marco Ayala, del diario *El Caleño*, y Carlos Chavarro, del diario *El Occidente*, ambos fotógrafos, fueron agredidos por manifestantes cuando cubrían una marcha de protesta de empleados del sector público en la ciudad de Cali, situada a 250 Km al sudoeste de Bogotá.

El 8 de mayo, Rafael Poveda, Oscar Obregoso, Germán Espejo, John Ripe y Mauricio Anzola, del canal de televisión Caracol TV, así

como Andrés Gil, Fernando Giraldo y Harold Joya, de RCN TV, fueron el blanco de disparos. Los dos equipos de televisión fueron atacados mientras se desplazaban por el río Cimitarra, que delimita los departamentos de Bolívar y Santander (en el norte del país). Esta región es escenario de violentos enfrentamientos entre el ejército, los paramilitares y los grupos guerrilleros.

El 14 de agosto, Maruja Parra, fotógrafa del diario El Universal, publicado en Cartagena, (norte del país), y José Torreglosa, cámara del telediario «Cartagena 6.25» que se difunde por el canal de televisión Telecaribe, fueron agredidos por estudiantes mientras cubrían un movimiento de protesta contra la elección del nuevo rector de la universidad de esa ciudad. Los estudiantes se ensañaron en particular con la periodista, a la que insultaron y golpearon, e intentaron robarle su cámara fotográfica. El 21 de septiembre se tuvo conocimiento de que Ramón Eduardo Martínez y Rafael Guerrero, respectivamente corresponsal y cámara

de RCN TV, fueron atacados a balazos por varios individuos en el sector de San Cayetano, en el norte del departamento de Santander. Los periodistas realizaban un reportaje sobre los candidatos a las elecciones municipales amenazados en esta región bajo control militar. El 19 de octubre, el vehículo que transportaba a Carlos Bravo y César Paredes, respectivamente periodista y cámara de la televisión ecuatoriana Gamavisión, así como a un periodista de *La Hora*, un diario de ese mismo país, fue detenido por cinco hombres armados en La Dorada, ciudad situada a pocos kilómetros de la frontera con Ecuador. Los agresores se apoderaron de los casetes vídeo y de las películas fotográficas y obligaron a los periodistas a dar media vuelta. Su vehículo se convirtió entonces en blanco de las balas en una región donde se enfrentan grupos guerrilleros y paramilitares. Los periodistas realizaban una investigación acerca del secuestro de una decena de personas en esa zona fronteriza.

Periodistas amenazados

El 28 de abril de 2000 se tuvo conocimiento de que Mario Parra, de la emisora de radio La Voz de Cinaruco, que pertenece a la red Caracol Radio, había tenido que abandonar el lugar donde estaba refugiado por otro sitio más seguro. Desde febrero de 1999, el periodista recibía amenazas atribuidas a grupos guerrilleros. Residente en Arauca, en el nordeste del país, el periodista, al intensificarse las amenazas, se había refugiado primero en Cúcuta (nordeste), en junio de 1999. Comentando el asesinato de un político atribuido a la guerrilla, Mario Parra había declarado en directo: «Aquí, los únicos que mueren viejos son los guerrilleros.»

El 30 de abril, Arturo Prado Lima, de los telediarios «Hora Cero» y «Noticiero 90», pudo escapar a un intento de secuestro atribuido a las AUC cuando se disponía a participar, como mediador, en la liberación de un sindicalista secuestrado por las FARC. Estas últimas, que habían bloqueado una carre-

tera del departamento del Cauca, incendiaron el vehículo y el material del periodista. Éste, al ver la carretera bloqueada, había abandonado su automóvil unos minutos antes.

El 24 de mayo, la redacción del diario *El Espectador* recibió un fax atribuido a los paramilitares en el que se amenazaba de muerte a Ignacio Gómez y a Hollman Felipe Morris de ese diario y a Patricia Uribe y Erika Carrillo, periodistas de televisión.

El 23 de junio, Álvaro Gómez Rengifo, del diario *La Patria*, publicado en Manizales (al este de Bogotá), fue objeto de amenazas. En el marco de su investigación sobre una serie de homicidios ocurridos en la región entre 1997 y 1999, el periodista se había quejado, en varias ocasiones, de que la policía se rehusaba a comunicar informaciones.

En septiembre se tuvo conocimiento de que Olga Lucía Garzón y Juan Carlos Escobar, del diario *El Nuevo Día*, publicado en Ibagué, recibían amenazas desde hacía tres meses. Ambos periodistas cu-

brían el conflicto entre los grupos guerrilleros y paramilitares en la región. En una llamada telefónica, un interlocutor anónimo les había fijado una cita para que le entregaran las informaciones de que disponían sobre el conflicto so pena de hacerles «desaparecer». El 30 de octubre, la oficina regional del diario *El Tiempo* en Barranquilla recibió una llamada: «Gamboa y Falla tienen 24 horas para salir de Barranquilla, segundo aviso.» Orlando Gamboa y Álvaro Falla son, respectivamente, jefe de redacción y responsable de la oficina regional del diario. Ocho días antes, el diario había recibido una llamada en la que se amenazaba con tomar represalias contra ambos periodistas si el alcalde de la ciudad no era reelecto en las elecciones municipales del 29 de octubre. *El Tiempo* había criticado reiteradamente la gestión del alcalde en el transcurso de los últimos años.

Presiones y trabas

El 11 de febrero de 2000, dos vehículos pertenecientes a la emisora de radio Caracol y al canal Caracol de Televisión fueron incendiados por guerrilleros del ELN en la localidad de San Luis, departamento de Antioquia. El grupo armado afirmó que sancionaba así a esos dos medios por su cobertura de una operación que el ELN había llevado a cabo en la autopista entre Medellín y Bogotá.

El 13 de abril, dos individuos armados irrumpieron en los locales del bimestral *Alternativa*, situados en el centro de Bogotá. Tras neutralizar a Giselle Torres y a Carolina Arévalo, asistentes del director de publicación, destrozaron las oficinas y robaron los discos duros de los ordenadores, varios documentos, así como la maqueta de la revista cuya publicación estaba prevista cuatro días más tarde. El bimestral se disponía a publicar un reportaje sobre un supuesto complot de la extrema derecha para tomar el poder. Después de esta agresión, *Alternativa* ha cesado de



aparecer por falta de recursos económicos.

El 20 de junio, un camión que transportaba 3.000 ejemplares del diario El Tiempo fue interceptado por el «Frente 19» de las FARC en una carretera situada en el límite entre las provincias de Magdalena y del César (en el norte). Los guerrilleros quemaron la totalidad de los ejemplares al borde de la carretera antes de dejar que el camión prosiguiera camino. En 2000, este grupo armado ya había robado en dos

oportunidades varios miles de ejemplares del mismo diario en los departamentos del norte del país.

El 13 de octubre, unos cuarenta habitantes de Usme, un distrito de Bogotá, penetraron en los locales del canal de televisión RCN TV. Éste acababa de difundir un informe que acusaba al alcalde del distrito de corrupción. El guardián de los locales fue agredido y tuvo que ser hospitalizado. Los manifestantes ocuparon las oficinas durante más de siete horas.